



**Resolución No. CSJBOR23-129**  
**Cartagena de Indias D.T. y C., 14 de febrero de 2023**

*“Por medio de la cual se decide una vigilancia judicial administrativa”*

**Vigilancia judicial administrativa No:** 13001-11-01-002-2023-00025  
**Solicitante:** Edgar Enrique Sierra Rodríguez  
**Despacho:** Juzgado Promiscuo Municipal de San Jacinto  
**Servidor judicial:** Lizeth Ramona Vergara Pacheco y Alonso Saucedo Guerra  
**Tipo de proceso:** Ejecutivo de alimentos  
**Radicado:** 13654408900120210016500  
**Magistrado ponente:** Iván Eduardo Latorre Gamboa  
**Fecha de sesión:** 8 de febrero de 2023

**I. ANTECEDENTES**

**1. Solicitud de vigilancia judicial administrativa**

Por mensaje de datos recibido el 17 de enero de la presente anualidad, el señor Edgar Enrique Sierra Rodríguez solicitó que se ejerza vigilancia judicial administrativa sobre el proceso ejecutivo de alimentos identificado con el radicado No. 13654408900120210016500, que cursa en el Juzgado Promiscuo Municipal de San Jacinto, debido a que, según indica, desde el 26 de agosto de 2022 se ha solicitado aclaración de medida de embargo ordenada el 14 de julio de esa anualidad, así como copia de audios de audiencia de conciliación, sin que se haya tramitado o efectuado pronunciamiento sobre dichos requerimientos, a pesar de haberse comunicado telefónicamente con el secretario de ese despacho.

**2. Trámite de la vigilancia judicial administrativa**

Por considerar que la solicitud de vigilancia judicial cumplía con los requisitos consignados en el artículo 3° del Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011, mediante Auto CSJBOAVJ23-27 del 20 de enero de 2023, se dispuso requerir a los doctores Lizeth Ramona Vergara Pacheco y Alonso Saucedo Guerra, jueza y secretario, respectivamente, del Juzgado Promiscuo Municipal de San Jacinto, para que suministraran información detallada del proceso referenciado, el cual fue notificado mediante mensaje de datos el 25 de enero del año en curso.

**3. Informe de verificación**

Dentro de la oportunidad para ello, los doctores Lizeth Ramona Vergara Pacheco y Alonso Saucedo Guerra, jueza y secretario, respectivamente, del Juzgado Promiscuo Municipal de San Jacinto, rindieron informes bajo la gravedad de juramento (artículo 5° Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011); indicaron, que mediante auto del 26 de enero de la presente anualidad se resolvieron las solicitudes presentadas por el quejoso y, de igual manera, se remitió copia de archivos de audio y video de audiencia requerida, mediante mensaje de datos del 27 de enero siguiente.

Por su parte, la titular del despacho afirmó que desconocía de los trámites alegados por el quejoso, toda vez que no habían sido puestos en su conocimiento por parte del secretario,

a pesar de que este estuviera debidamente notificado del manual de funciones interno, según el cual, en consonancia con lo establecido en el artículo 109 del Código General del Proceso, se debía ingresar el expediente al despacho junto con las solicitudes o memoriales presentados cuando se requiera de pronunciamiento por parte del funcionario, situación que solo ocurrió el 26 de enero hogano.

### **3. Explicaciones**

Consideró el despacho ponente, que existía mérito para dar apertura de la vigilancia judicial administrativa respecto del doctor Alonso Saucedo Guerra, secretario del Juzgado Promiscuo Municipal de San Jacinto, por lo cual, se le requirieron explicaciones con el fin de verificar la configuración de acciones u omisiones que atenten contra una oportuna y eficaz administración de justicia; por lo anterior, mediante Auto CSJBOAVJ23-54 del 1° de febrero de 2023, se le requirió que indicara las justificaciones, informes, documentos y pruebas que pretenda hacer valer, para justificar la presunta mora en efectuar el pase al despacho del expediente, para lo cual se le otorgó el término de tres días contados a partir de su comunicación, la cual se surtió el 2 de febrero siguiente.

Frente al nuevo requerimiento, el doctor Alonso Saucedo Guerra presentó las explicaciones solicitadas; indicó no haber incurrido premeditadamente en tardanza para tramitar las solicitudes alegadas, sino que ello obedeció a que los memoriales presentados fueron alojados en la bandeja de correo no deseado de la dirección electrónica institucional del despacho, por lo cual no advirtieron de su existencia oportunamente, sino con ocasión del presente trámite administrativo.

## **II. CONSIDERACIONES**

### **1. Competencia**

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es competente para conocer sobre la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por el señor Edgar Enrique Sierra Rodríguez, conforme a lo prevenido en el artículo 1° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, reglamentario del numeral 6° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, habida cuenta que la petición se dirige en contra de uno de los despachos judiciales de esta circunscripción territorial.

### **2. Problema administrativo**

Conforme a los hechos en que se funda la solicitud y lo revisado en el expediente digital, corresponde a esta Corporación determinar si han existido actuaciones y omisiones en el decurso del proceso de la referencia, en específico sobre la mora judicial alegada, que involucren un desempeño contrario a la administración oportuna y eficaz de la justicia.

En caso de estimarse lo anterior, atendiendo a que la solicitante enuncia circunstancias de mora judicial, se determinará la procedencia de la imposición de correctivos administrativos o compulsas de copias a la jurisdicción disciplinaria contra los servidores judiciales determinados.

Para resolver la cuestión planteada, se deberán abordar los temas relacionados a continuación.

### **3. Alcances de la vigilancia judicial administrativa**

Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.  
Teléfono: 6647313. [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co)  
Correo electrónico: [consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co)  
Cartagena – Bolívar. Colombia

El Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, adopta el reglamento respecto del mecanismo de la vigilancia judicial administrativa consagrada en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y establece en su artículo 1° que se concibe “para que la justicia se administre oportuna y eficazmente” y que “es diferente de la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias”, lo que conduce a inferir que el estudio se ciñe a determinar: i) cuestiones de incumplimiento de términos actuales porque las anomalías pasadas deben ser objeto de los procesos disciplinarios; ii) si un funcionario incurrió en acciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia; y iii) si existe una actuación en forma negligente o si por el contrario su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación o responsabilidad.

De otra parte, el artículo 14 del Acuerdo en comento prescribe: “Independencia y autonomía judicial. En desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones”. Dicha norma se encuentra en consonancia con lo contemplado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política y el artículo 5° de la Ley 270 de 1996, lo cual significa que la institución de la vigilancia judicial administrativa, como mecanismo administrativo que es, no está diseñado para controvertir decisiones judiciales, ni la forma como un funcionario interpreta una norma o valora las pruebas. Así mismo, es pertinente resaltar que este trámite no es otra instancia judicial y no puede emplearse para revivir términos.

En conclusión, esta atribución del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es de naturaleza eminentemente administrativa y separada de la función jurisdiccional disciplinaria contra jueces y abogados, que le corresponde a la Comisión de Disciplina Judicial.

#### **4. El derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas**

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8°, prevé dentro de las garantías procesales, el derecho de toda persona “a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable (...)”.

Por su parte, la Constitución Política en sus artículos 29 y 229 consagran los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, respectivamente, lo cuales comprenden las prerrogativas que se enuncian a continuación: i) el derecho que tiene toda persona de poner en funcionamiento el aparato judicial, ii) el derecho a obtener una respuesta oportuna, y iii) el derecho a que no se incurran en omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones judiciales.

La anterior consagración implica el deber de todas las autoridades públicas de observar de manera diligente los términos y adelantar de manera oportuna los trámites judiciales de que conoce, en tanto su inobservancia y la dilación injustificada “(...) pueden conllevar la vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración en general, y a la administración de justicia en particular”, amén de resultar lejana la efectividad de una justicia material en el caso concreto.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha considerado también que “el incumplimiento de los plazos judiciales tiene un carácter excepcional, pues la regla general,

contenida en el artículo 228 superior, es la obligatoriedad de los términos procesales”, en ese sentido, se admite en casos excepcionales que el incumplimiento de los términos procesales no le es directamente atribuible al funcionario judicial en tanto “la mora, la congestión y el atraso judiciales son algunos de los fenómenos que afectan de manera estructural la administración de justicia en Colombia”.

En ese orden, con relación a la mora judicial, mediante sentencia T-052 de 2018, la Corte Constitucional precisó:

*“La mora judicial es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.*

*(...)*

*Dentro del deber de garantizar el goce efectivo del derecho, se encuentra incluida la solución célere de los asuntos adelantados ante funcionarios judiciales, por ello, esta Corte ha determinado la prohibición de dilaciones injustificadas en la administración de justicia (...).*

Al respecto, en Sentencia T-230 de 2013, reiterada en la T-186 de 2017, entre otras, la Sala Tercera de Revisión expuso las circunstancias en las cuales se configura la mora judicial injustificada: *“(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial”.*

En el mismo fallo, se enunciaron las circunstancias en las que se encuentra justificado el incumplimiento de los términos judiciales señalados por la jurisprudencia constitucional, resumidos de la siguiente manera: *“(i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley”.*

También respecto a este asunto, el Consejo de Estado ha expresado: *“(...) no existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que esta debe ser injustificada, debe estar probada la negligencia de la autoridad judicial demandada y que sea probable la existencia de un perjuicio irremediable. Si por el contrario, la actuación de los falladores de instancia es célere y diligente, pero por circunstancias imprevisibles no es posible dar cumplimiento a los términos judiciales, tampoco se configura la alegada mora judicial”.*

Quiere decir lo anterior, que para determinar si se está o no frente a una dilación justificada es necesario realizar un análisis valorativo y la comprobación de las circunstancias en el caso concreto, “juicio ciertamente complejo en el que “deben tomarse en consideración las circunstancias particulares del despacho que adelanta la actuación y del trámite mismo, entre las que se cuentan: i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia, ii) el cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del funcionario, iii) la complejidad del caso sometido a su conocimiento y iv) el cumplimiento de las partes de sus deberes en el impulso procesal”.

Por tanto, la omisión o dilación en el cumplimiento de los términos procesales en cuanto su relevancia constitucional está ligada a la relación intrínseca entre la carga funcional y el cumplimiento de los deberes a su cargo.

En conclusión, puede afirmarse válidamente que, de conformidad con la jurisprudencia sentada por estas corporaciones, la mora judicial que configura vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, se caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente, (ii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora es debida a circunstancias que no puede contrarrestar y directamente relacionada con el punto anterior, y, (iii) la omisión en el cumplimiento de sus funciones por parte del trabajador, debido a la negligencia y desidia respecto de sus obligaciones en el trámite de los procesos.

A su turno, cuando se presenta un incumplimiento de los términos procesales, la prosperidad de las causales eximentes de sanción administrativa corresponde examinarlas en cada caso concreto. El incumplimiento de los términos se entiende justificado “(i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constatan problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución del caso en el plazo previsto en la ley”.

Lo descrito en precedencia, fue tenido en cuenta en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, cuando en el artículo 7º dijo:

“(…) la respectiva Sala Administrativo del Consejo Seccional de la Judicatura, decidirá si ha habido un desempeño contrario a la administración oportuna y eficaz de la justicia en el preciso y específico proceso o actuación judicial de que se trate.

Para el efecto se tendrá en cuenta que el hecho no obedezca a situaciones originadas en deficiencias operativas del despacho judicial, no atribuibles al servidor judicial, así como los factores reales e inmediatos de congestión no producidos por la acción u omisión del funcionario o empleado requerido, todo lo cual lo exime de los correctivos y anotaciones respectivas”.

Implica lo anterior, que en el trámite de una vigilancia judicial administrativa cada caso concreto debe analizarse de manera particular y observarse las circunstancias propias del despacho, así como la gestión del servidor judicial; entre esos aspectos la carga efectiva, los ingresos efectivos y la productividad, que permitan concluir, en el evento de no acatarse el término perentorio e improrrogable, la existencia de razones no solo que la expliquen sino que la justifiquen, pues no es admisible que frente a circunstancias objetivas de dificultad en la gestión judicial se exija el cumplimiento inexorable de los términos, pues si bien su incumplimiento es sancionable, tal hecho “se exculpa cuando se presenta una causa extraña o cuando se desborda la capacidad física del funcionario con la cantidad de trabajo que le corresponde en ese determinado momento (...)”.

## **5. Plazo razonable como elemento fundamental para determinar la configuración de mora judicial**

Aunado a lo expuesto en el acápite anterior, es fundamental ahondar sobre lo que debe entenderse por plazo razonable en la resolución de los procesos judiciales, como quiera

que este constituye un elemento determinante para establecer la configuración o no de la mora judicial en un caso específico.

En ese orden, el plazo razonable es concebido como una forma de garantizar que la duración de los procesos y actuaciones judiciales, no conlleven a una vulneración de derechos de quienes acceden a la administración de justicia.

Sobre el tema, la Corte Constitucional en sentencia SU-394 de 2016, se apoyó en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que establece : “Respecto a la garantía del plazo razonable la Corte ha establecido que es necesario tomar en consideración cuatro elementos a fin de determinar su razonabilidad: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado, c) conducta de las autoridades judiciales y d) los efectos que la demora en el proceso puedan tener sobre la situación jurídica de la víctima”.

A su turno, el Consejo de Estado ha señalado: “(...) para la determinación de qué se entiende por “violación o desconocimiento del plazo razonable” corresponde al juzgador analizar las condiciones de tiempo, modo y lugar, así como los factores internos y externos en los que se presta el servicio, en otros términos, con qué instrumentos o herramientas se contaba para adoptar la decisión y, por lo tanto, si no existen circunstancias que justifiquen el retardo en la definición del asunto administrativo o jurisdiccional”.

## **6. Caso concreto**

El señor Edgar Enrique Sierra Rodríguez solicitó que se ejerza vigilancia judicial administrativa sobre el proceso de la referencia, que cursa en el Juzgado Promiscuo Municipal de San Jacinto, debido a que, según indica, desde el 26 de agosto de 2022 ha solicitado aclaración de medida de embargo ordenada el 14 de julio de esa anualidad, así como copia de audios de audiencia de conciliación, sin que se haya tramitado o efectuado pronunciamiento sobre dichos requerimientos, a pesar de haberse comunicado telefónicamente con el secretario de ese despacho.

Frente a las alegaciones del peticionario, los doctores Lizeth Ramona Vergara Pacheco y Alonso Saucedo Guerra, jueza y secretario, respectivamente, rindieron informes bajo la gravedad de juramento; indicaron, que mediante auto del 26 de enero de la presente anualidad se resolvieron las solicitudes presentadas por el quejoso y se remitió copia de los archivos de audio y video de la audiencia requerida, mediante mensaje de datos del 27 de enero siguiente.

La titular del despacho afirmó que desconocía de los trámites alegados por el quejoso, toda vez que no habían sido puestos en su conocimiento por parte del secretario, a pesar de que este está notificado del manual de funciones interno, según el cual, en consonancia con lo establecido en el artículo 109 del Código General del Proceso, se debe ingresar el expediente al despacho junto con las solicitudes o memoriales presentados cuando se requiera de pronunciamiento por parte del funcionario, situación que solo ocurrió el 26 de enero hogañ.

Frente a dicha afirmación, el doctor Alonso Saucedo Guerra, secretario, indicó que no incurrió premeditadamente en tardanza para tramitar las solicitudes alegadas, sino que los memoriales presentados fueron alojados en la bandeja de correo no deseado de la dirección electrónica institucional del despacho, por lo cual no se advirtió de su existencia oportunamente, sino con ocasión del presente trámite administrativo.

Teniendo en cuenta la solicitud de vigilancia judicial administrativa, los informes y las explicaciones rendidas, así como los documentos aportados, se tiene que dentro del proceso de la referencia se surtieron las siguientes actuaciones:

No.	Actuación	Fecha
1	Memorial solicita aclaración sobre el embargo decretado mediante auto de 14 de julio de 2022	26/08/2022
2	Solicitud de corrección de descuento realizada por el cajero pagador de la parte demandada	13/09/2022
3	Solicitud de entrega de audios y videos de audiencia de conciliación celebrada dentro del proceso	14/10/2022
4	Comunicación requerimiento de informe dentro de la solicitud de vigilancia judicial	25/01/2023
5	Pase al despacho del expediente	26/01/2023
6	Auto resuelve solicitudes realizadas por la parte demandante	26/01/2023
7	Notificación por estado electrónico de auto de 26/01/2023	27/01/2023
8	Elaboración y remisión de oficios en los que se corrige orden de descuento dirigida al cajero pagador del demandado	27/01/2023
9	Remisión de audios y videos de audiencia de conciliación	27/01/2023

Descendiendo al caso en concreto, se tiene que el objeto de la solicitud de vigilancia judicial administrativa se ciñe en la presunta mora en la que se encuentra incurso el Juzgado Promiscuo Municipal de San Jacinto en tramitar el requerimiento de aclaración sobre embargo, corrección de descuento, así como entrega de audios y videos de audiencia de conciliación dentro del proceso de marras.

Del estudio del informe y las explicaciones aportadas, se colige que el auto que resolvió las solicitudes alegadas por el quejoso, así como la remisión de los audios y videos solicitados, se efectuaron el 27 de enero de la presente anualidad, esto, con posterioridad a la comunicación del requerimiento de informe efectuado por esta Seccional, lo que ocurrió el 25 de enero hogaño, por lo que se tiene que dicha actuación fue adelantada con ocasión del presente trámite administrativo.

Ahora bien, respecto de la doctora Lizeth Ramona Vergara Pacheco, Jueza Promiscuo Municipal de San Jacinto, se tiene que la funcionaria profirió el auto que resolvió las solicitudes aducidas al día hábil siguiente del pase al despacho del expediente, esto, dentro del término establecido en el artículo 120 del Código General del Proceso<sup>1</sup>. Así las cosas, como no se observa una situación de mora por parte de la funcionaria que deba ser resuelta mediante la vigilancia judicial, se dispondrá al archivo del presente trámite administrativo respecto de esta.

No obstante lo anterior, observa esta Seccional que entre la presentación de la primera solicitud y el pase al despacho del expediente para su trámite transcurrieron 89 días hábiles, término que supera el establecido en el artículo 109 del Código General del Proceso.

<sup>1</sup> ARTÍCULO 120. TÉRMINOS PARA DICTAR LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES POR FUERA DE AUDIENCIA. En las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y los magistrados deberán dictar los autos en el término de diez (10) días y las sentencias en el de cuarenta (40), contados desde que el expediente pase al despacho para tal fin (...)



*“ARTÍCULO 109. PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DE MEMORIALES E INCORPORACIÓN DE ESCRITOS Y COMUNICACIONES. El secretario hará constar la fecha y hora de presentación de los memoriales y comunicaciones que reciba y los agregará al expediente respectivo; los ingresará inmediatamente al despacho solo cuando el juez deba pronunciarse sobre ellos fuera de audiencia. Sin embargo, cuando se trate del ejercicio de un recurso o de una facultad que tenga señalado un término común, el secretario deberá esperar a que este transcurra en relación con todas las partes (...).”*

Lo anterior en concordancia a lo consagrado en el artículo 153 de la Ley 270 de 1996, a saber:

*“ARTÍCULO 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:*

*(...)*

*2. Desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo. (...)*

*5. Realizar personalmente las tareas que les sean confiadas y responder del uso de la autoridad que les haya sido otorgada o de la ejecución de las órdenes que puede impartir, sin que en ningún caso quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la que corresponda a sus subordinados. (...)*

*20. Evitar la lentitud procesal, sancionando las maniobras dilatorias así como todos aquellos actos contrarios a los deberes de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe (...).”*

Ahora, frente al argumento del secretario, de no haber advertido la existencia de los memoriales alegados, toda vez que estos se alojaron en la bandeja de correo electrónico no deseado del despacho, debe precisar esta Corporación que, si bien los empleados no están exentos de cometer errores involuntarios que puedan retrasar los trámites pertinentes, tampoco puede tomarse lo ocurrido como exculpación para la tardanza presentada de X89 días hábiles, ya que es obligación de los servidores la verificación de todas las bandejas de los correos electrónicos que se encuentren a su cargo, para evitar situaciones como la ocurrida en el caso particular, por lo que se tiene que, en principio el servidor judicial faltó a su deber legal; más aun si se tiene en cuenta que, como lo afirmó el quejoso en su escrito, se comunicó de manera telefónica con el secretario del despacho para indagar por las solicitudes presentadas.

En consecuencia, y comoquiera que no existe un motivo razonable, pues las explicaciones indicadas por el secretario no son suficientes para justificar la tardanza presentada, se aplicarán los correctivos determinados en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011 y se ordenaría restarle un punto en el factor eficiencia o rendimiento de la calificación integral de servicios; no obstante, como quiera que el doctor Alonso Saucedo Guerra no se encuentra en carrera dentro de la Rama Judicial, no es posible aplicar dicha sanción, por lo que solo se ordenará compulsar copias para que se investigue disciplinariamente la conducta desplegada por el servidor judicial.

Así pues, se compulsarán copias de la presente actuación con destino a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, para que, dentro de sus facultades, investigue la conducta desplegada por el doctor Alonso Saucedo Guerra, secretario del Juzgado Promiscuo Municipal de San Jacinto, conforme al ámbito de su competencia.

De conformidad con lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,



### 3. RESUELVE

**PRIMERO:** Declarar, para todos los efectos legales y reglamentarios, que en el trámite del proceso ejecutivo de alimentos identificado con el radicado No. 13654408900120210016500, que cursa en el Juzgado Promiscuo Municipal de San Jacinto, se verificaron actuaciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia y el anormal desempeño de sus labores, por parte del doctor Alonso Saucedo Guerra, en calidad de secretario de esa agencia judicial.

**SEGUNDO:** Archivar respecto de la doctora Lizeth Ramona Vergara Pacheco, Jueza Promiscuo Municipal de San Jacinto, la solicitud vigilancia judicial administrativa promovida por el señor Edgar Enrique Sierra Rodríguez, por las razones anotadas.

**TERCERO:** Compulsar copias de la presente actuación con destino a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, para que, en atención a lo consignado, investigue las conductas desplegadas por el doctor Alonso Saucedo Guerra, secretario del Juzgado Promiscuo Municipal de San Jacinto, en el trámite del proceso de marras, conforme al ámbito de su competencia.

**CUARTO:** Notificar la presente resolución al solicitante y a los doctores Lizeth Ramona Vergara Pacheco y Alonso Saucedo Guerra, jueza y secretario, respectivamente, del Juzgado Promiscuo Municipal de San Jacinto.

**QUINTO:** Contra esta decisión solo procede recurso de reposición, que deberá ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación o comunicación, ante esta misma corporación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, art. 74 y siguientes.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**PATRICIA ROCÍO CEBALLOS RODRÍGUEZ**  
Presidenta

MP. IELG / KLDS